

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

INE/JGE278/2022

**RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD
INE/RI/SPEN/14/2022**

Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2022.

VISTOS para resolver los autos del Recurso de Inconformidad al rubro indicado, interpuesto para controvertir el oficio INE/DESPEN/619/2022 del 22 de marzo de dos mil veintidós, emitido por la Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.

ÍNDICE

GLOSARIO - - - - -	2
ANTECEDENTES - - - - -	3
CONSIDERANDOS - - - - -	8
PRIMERO. Competencia - - - - -	8
SEGUNDO. Normatividad aplicable - - - - -	8
TERCERO. Pretensión de la litis - - - - -	8
CUARTO. Agravios - - - - -	9
QUINTO. Estudio de fondo - - - - -	9
1) Primer agravio en análisis - - - - -	10
2) Segundo agravio en análisis - - - - -	33

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

3) Tercero y cuarto agravio en análisis - - - - -	44
4) Quinto agravio en análisis - - - - -	54
5) Sexto agravio en análisis - - - - -	60
SEXTO. Determinación - - - - -	53
PUNTOS RESOLUTIVOS - - - - -	65

G L O S A R I O

Acto Impugnado:	Oficio INE/DESPEN/619/2022 del 22 de marzo de 2022, emitido por la Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
Consejo General:	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Convocatoria:	Convocatoria para Cambios de Adscripción o Rotación a petición de persona interesada del sistema del Instituto Nacional Electoral publicada el 7 de febrero de 2022
DEA:	Dirección Ejecutiva de Administración
DESPEN:	Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
Estatuto 2016:	Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa aprobado el 30 de octubre de 2015 mediante Acuerdo INE/CG909/2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2016 cuya entrada en vigor fue el 10 de marzo de 2016

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

Estatuto 2020:	Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa aprobado el 8 de julio de 2020 mediante el Acuerdo INE/CG162/2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2020 cuya entrada en vigor fue el 24 de julio de 2020
Junta General Ejecutiva:	Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
Lineamientos	Lineamientos para cambios de adscripción y rotación del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral aprobados el 20 de julio de 2021 mediante Acuerdo INE/JGE138/2021
Recurrente:	* [REDACTED]

ANTECEDENTES:

- I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General aprobó a través del Acuerdo INE/CG909/2015 el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2016 y entró en vigor el 10 de marzo de 2016.
- II. El 29 de febrero de 2016, la Junta General Ejecutiva emitió el Acuerdo INE/JGE58/2016, mediante el cual se aprobaron los Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, los cuales entraron en vigor al día siguiente de su aprobación.
- III. El 10 de octubre de 2018, la Junta General Ejecutiva emitió el Acuerdo INE/JGE164/2018, mediante el cual se aprobó la modificación de los Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, aprobados mediante el Acuerdo INE/JGE58/2016; las

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

modificaciones a los Lineamientos entraron en vigor al día siguiente de su aprobación.

- IV. El 13 de diciembre de 2018, la Junta General Ejecutiva emitió el Acuerdo INE/JGE227/2018, mediante el cual se aprobó la modificación a los Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, aprobados mediante el Acuerdo INE/JGE58/2016 y modificados por primera ocasión mediante el Acuerdo INE/JGE164/2018; éstas segundas modificaciones entraron en vigor al día siguiente a su aprobación.
- V. El 21 de febrero de 2020, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG56/2020, mediante el cual se designó como ganadores para ocupar cargos de Vocal Ejecutivo Distrital del Servicio Profesional Electoral Nacional, a las personas aspirantes que formaban parte de la Lista de Reserva del Concurso Público 2019-2020, del sistema del Instituto Nacional Electoral, entre ellos, se designó al recurrente para ocupar el cargo de * [REDACTED].
- VI. El 1 de marzo de 2020, surtió efectos la designación del recurrente para ocupar el cargo de * [REDACTED], lo anterior, mediante el oficio INE/SE-0212/2020 con el que se otorgó el nombramiento provisional, así como con el oficio INE/SE-0211/2020 mediante el cual se otorgó la adscripción.
- VII. El 8 de julio de 2020, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG162/2020, mediante el cual a propuesta de la Junta General Ejecutiva, aprobó la reforma al Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2020 y entró en vigor al día siguiente al de su publicación. Con lo anterior, quedó derogado el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa aprobado mediante el Acuerdo INE/CG909/2015.
- VIII. El 21 de enero de 2021, la Junta General Ejecutiva emitió el Acuerdo INE/JGE11/2021, mediante el cual se aprobaron los Lineamientos para la

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

Planeación y Evaluación del Servicio Profesional Electoral Nacional; y en el artículo Tercero Transitorio se dispuso que la DESPEN presentaría para aprobación de la propia Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, un plan correspondiente al ciclo de transición en el sistema del Servicio del Instituto que comprendió de septiembre de 2020 a agosto de 2022.

- IX. El 26 de marzo de 2021, la Junta General Ejecutiva emitió el Acuerdo INE/JGE59/2021, mediante el cual aprobó el Plan para el ciclo de transición 2020-2022 del Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto Nacional Electoral; el cual entró en vigor al día siguiente de su aprobación.
- X. El 20 de julio de 2021, la Junta General Ejecutiva emitió el Acuerdo INE/JGE138/2021, mediante el cual aprobó los Lineamientos para cambios de adscripción y rotación del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, los cuales entraron en vigor al día siguiente al de su aprobación.
- XI. El 26 de enero de 2022, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG23/2022, mediante el cual, en cumplimiento a la sentencia SG-JLI-6/2020 de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se aprobaron reformas y adiciones al Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa aprobado mediante el Acuerdo INE/CG162/2020, dicho Acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 2022 y entró en vigor al día siguiente a su publicación, es decir, el 18 de marzo de 2022.
- XII. El 7 de febrero de 2022, la DESPEN publicó la Convocatoria para Cambios de Adscripción o Rotación a petición de persona interesada del sistema del Instituto Nacional Electoral, en donde se establecen las reglas de operación del proceso, así como información sobre las plazas vacantes, los requisitos, los criterios de preferencia, las causales de improcedencia de las solicitudes y otras disposiciones, para los cambios de adscripción y rotación a petición de persona interesada.
- XIII. El 15 de febrero de 2022, la DESPEN recibió mediante correo electrónico escrito a través del cual, el recurrente y otra funcionaria plantearon lo siguiente:

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

*“**Primero.** Se nos tenga presentando nuestra solicitud de habilitación para realizar cambio de adscripción a petición de personas interesadas, por la vía de la permuta en cargos o puestos homólogos, respecto de la*

** [REDACTED] , y del **

*invocando situaciones no previstas en la Convocatoria, con sustento en el apartado **F. OTRAS DISPOSICIONES**, fracción II, de la Convocatoria.*

***Segundo.** Se someta la presente solicitud a la consideración de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, para su resolución, previo conocimiento de las y los integrantes de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la persona Titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto.*

***Tercero.** Se emita resolución favorable a la luz de las consideraciones de hecho y de derecho expuestas en el presente escrito, a fin de que se habilite a quienes suscribimos para realizar el cambio de adscripción solicitado.*

***Cuarto.** Se nos tenga aceptando la recepción de notificaciones a través de las cuentas de correo electrónico institucional * [REDACTED] y * [REDACTED], respectivamente.”*

- XIV. El 22 de marzo de 2022, se notificó vía correo electrónico institucional al recurrente, el oficio INE/DESPEN/619/2022 mediante el cual la Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional concluyó que no es aplicable la disposición referente a las situaciones no previstas en la convocatoria, toda vez que la normativa aplicable establece con certeza y legalidad las condiciones, los términos, y los requisitos para que el personal del Servicio Profesional ejerza su derecho de solicitar su cambio de adscripción o rotación a petición de persona interesada previsto en el artículo 67, fracción XI del Estatuto, por tanto, se determinó que la solicitud de cambio de adscripción por la vía de la permuta entre el recurrente y otra funcionaria, resultó improcedente.

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

- XV. El 5 de abril de 2022, el recurrente presentó ante la Junta Local Ejecutiva en el estado de Puebla, escrito de recurso de inconformidad en contra del oficio INE/DESPEN/619/2022 del 22 de marzo de 2022, emitido por la Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, el mismo día el Vocal Secretario de dicha Junta lo remitió a la DESPEN.
- XVI. El 6 de abril de 2022, la Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional remitió el escrito de impugnación y anexos a la Dirección Jurídica, para los efectos conducentes.
- XVII. El 20 de abril de 2022, el Director Jurídico del Instituto Nacional Electoral emitió Auto de Turno, mediante el cual dio cuenta del escrito y anexos del recurrente, y ordenó formar expediente de recurso de inconformidad y registrarlo con la clave INE/RI/SPEN/14/2022; asimismo, ordenó turnar el expediente a la DEA, como órgano encargado de elaborar el auto de admisión, de desechamiento o, en su caso, el proyecto de resolución respecto del recurso de mérito a efecto de someterlo a consideración de la Junta General Ejecutiva.
- XVIII. El 22 de abril de 2022, el Director de Asuntos Laborales adscrito a la Dirección Jurídica emitió el oficio INE/DJ/4833/2022, mediante el cual remitió a la Directora Ejecutiva de Administración, en formato digital, las constancias correspondientes al recurso de inconformidad INE/RI/SPEN/14/2022.
- XIX. El 26 de abril de 2022, la Coordinadora de Enlace Normativo e Información de la DESPEN emitió el oficio INE/DESPEN/CENI/172/2022, mediante el cual remitió a la Directora Ejecutiva de Administración, en formato digital, el expediente integrado en la DESPEN con motivo de la solicitud del recurrente, relacionada con el cambio de adscripción a petición de parte interesada, bajo la modalidad de permuta, del cargo de * [REDACTED] a la * [REDACTED].
- XX. El 11 de noviembre de 2022, el Secretario Ejecutivo dictó Auto de Admisión mediante el cual se tuvieron por cumplidos los requisitos de procedibilidad del presente medio de impugnación, y al no advertir ninguna causal de desechamiento o de no interposición se admitió el presente recurso de

**RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022**

inconformidad, se admitieron las pruebas ofrecidas por el recurrente¹, las cuales se tuvieron por desahogadas por su propia y especial naturaleza, se ordenó el cierre de instrucción y se puso el presente expediente en estado de resolución.

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. Competencia. Esta Junta General Ejecutiva es competente en el ámbito laboral para conocer y resolver el presente asunto, en función de lo dispuesto por los artículos 48, inciso o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 40, inciso o) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; y 360, fracción I del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, reformado mediante Acuerdo INE/CG162/2020 y adicionado mediante el Acuerdo INE/CG23/2022, por tratarse de la negativa de cambio de adscripción de miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional.

SEGUNDO. Normatividad aplicable. Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, aprobado mediante Acuerdo del Consejo General INE/CG162/2020 y adicionado mediante Acuerdo INE/CG23/2022, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 358, 360 fracción I y 368 del referido ordenamiento Estatutario.

TERCERO. Pretensión de la litis. Del análisis integral del escrito de recurso de inconformidad se advierte que la pretensión del recurrente, consiste en que esta Junta General Ejecutiva revoque el oficio INE/DESPEN/619/2022 del 22 de marzo de 2022 emitido por la Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, a efecto de que se emita una nueva respuesta al escrito de 15 de febrero de 2022 en la que se determine procedente el cambio de adscripción a petición de personas interesadas, por la vía de la permuta en cargos o puestos homólogos.

¹ **1. La documental privada.** Consistente en la copia simple del nombramiento provisional INE/SE-0212/2020, del 25 de febrero de 2020, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral; **2. La documental privada.** Consistente en la copia simple del oficio de adscripción INE/SE-0211/2020 del 25 de febrero de 2020, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral; **3. La documental pública.** Consistente en la copia simple de la Convocatoria para Cambios de Adscripción o Rotación a petición de persona interesada del sistema del Instituto Nacional Electoral; **4. La documental privada.** Consistente en la impresión del escrito de petición de fecha 15 de febrero de 2022, firmado electrónicamente por * y por *, así como correo electrónico de remisión dirigido de la cuenta institucional * a las cuentas institucionales cambioadscrip.despen@ine.mx y *; y **5. La documental privada.** Consistente en la impresión del oficio INE/DESPEN/619/2022 de fecha 22 de marzo de 2022, firmado electrónicamente por la Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, así como correo electrónico de remisión dirigido de la cuenta institucional * a la cuenta institucional *.

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

CUARTO. Agravios. En el escrito por medio del cual se promueve el presente recurso de inconformidad, el recurrente hace valer los siguientes 6 agravios:

1. Transgresión al principio de congruencia.
2. Transgresión al principio de exhaustividad.
3. Aplicación retroactiva de las fracciones I y II del artículo 237 del Estatuto, así como el artículo 39, fracción IV, de los Lineamientos, y apartado C, de la convocatoria.
4. Transgresión al principio de interpretación conforme y de interpretación más favorable a la persona.
5. Indebida fundamentación y motivación.
6. Vulneración al derecho de protección de la familia.

QUINTO. Estudio de fondo.

Es conveniente hacer mención que, para resolver la presente controversia, esta Junta General Ejecutiva se abocará a realizar el análisis de los agravios en un orden diferente al planteado por el recurrente, de la manera siguiente:

1) Primer agravio en análisis:

Aplicación retroactiva de las fracciones I y II del artículo 237 del Estatuto, así como el artículo 39, fracción IV, de los Lineamientos, y apartado C, de la convocatoria.

2) Segundo agravio en análisis:

Transgresión al principio de interpretación conforme y de interpretación más favorable a la persona.

3) Tercer y cuarto agravio en análisis:

Transgresión al principio de congruencia.

Transgresión al principio de exhaustividad.

4) Quinto agravio en análisis:

Indebida fundamentación y motivación.

5) Sexto agravio en análisis:

Vulneración al derecho de protección de la familia.

Cabe precisar que dicho actuar no le causa perjuicio al recurrente, pues lo importante es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso, lo anterior atendiendo al contenido de la Tesis Jurisprudencial VI.2o.C. J/304, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente:

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO.²

El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso.

1) Primer agravio en análisis:

[...]

3. Aplicación retroactiva de las fracciones I y II del artículo 237 del Estatuto, así como el artículo 39, fracción IV, de los Lineamientos, y apartado C, de la convocatoria.

El artículo 14 de la Constitución Política, dispone que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

² Registro digital: 167961. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Materia (s): Común. Tesis: VI.2o.C.J/304. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Febrero de 2009, página 1677. Tipo: Jurisprudencia.

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

Tal como se puede observar del numeral previamente citado, a ninguna ley se le puede dar un efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, lo que de suyo más que referirse a las leyes, hace alusión a los actos de aplicación de las mismas.

*En ese contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la irretroactividad que prohíbe el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra referida tanto al legislador, por cuanto a la expedición de las leyes, así como a las autoridades que las aplican a un caso determinado, y para resolverlo ha acudido a la teoría de los derechos adquiridos **y a la teoría de los componentes de la norma.***

Asimismo, en la sentencia SUP-RAP-384/2018, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el máximo tribunal en la materia reconoce la existencia, no solamente de la teoría de los derechos adquiridos, sino también, de la teoría de los componentes de la norma, para distinguir los supuestos en que la ley rige al pasado en perjuicio de las personas, tal y como se desprende de la siguiente transcripción:

“La irretroactividad de la ley significa que el nuevo ordenamiento legal rige para todos los hechos o actos producidos a partir de su vigencia, con lo cual se garantiza el respeto a los derechos, actos y relaciones jurídicas formadas válidamente bajo el imperio de una normativa legal anterior, puesto que la prohibición de la retroactividad constituye un presupuesto básico para la seguridad jurídica del gobernado, consistente en que esos derechos o actos ya no podrán ser afectados, desconocidos o violados con la aplicación de una nueva normatividad.

En ese tenor, para distinguir los supuestos en que la ley rige al pasado en perjuicio de las personas, la línea jurisprudencial desarrollada por el Máximo Tribunal Constitucional del país adoptó las teorías de los derechos adquiridos y de las expectativas de derecho, así como la de los componentes de la norma, ambas vigentes”.

Tal y como se reconoce en la sentencia antes citada, el Máximo Tribunal Constitucional del país no solamente ha desarrollado la línea

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

*jurisprudencial consistente en la teoría de los derechos adquiridos, sino que también dicho tribunal ha desarrollado la teoría de los componentes de la norma. Es así que, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia obligatoria **P./J. 123/2001**, con el siguiente rubro y contenido:*

Registro digital: 188508

Instancia: Pleno

Novena Época

Materia(s): Constitucional

Tesis: P./J. 123/2001

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Octubre de 2001, página 16

Tipo: Jurisprudencia

RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.

*Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que **toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia**, de suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; **sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo**. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y en principio, pueden darse las siguientes hipótesis:*

1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar,

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

*suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. **También puede suceder que la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior, que no se produjeron durante su vigencia, no dependa de la realización de los supuestos previstos en esa ley, ocurridos después de que la nueva disposición entró en vigor, sino que tal realización estaba solamente diferida en el tiempo, ya sea por el establecimiento de un plazo o término específico, o simplemente porque la realización de esas consecuencias era sucesiva o continuada; en este caso la nueva disposición tampoco deberá suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, por la razón sencilla de que éstas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley.** 4. Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan.*

Amparo en revisión 2030/99. Grupo Calidra, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.

Amparo en revisión 375/2000. Ceras Johnson, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente José

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes.

Amparo en revisión 2002/99. Grupo Maz, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz.

Amparo en revisión 1037/99. Fibervisions de México, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Rosalía Argumosa López.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinte de septiembre en curso, aprobó, con el número 123/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de septiembre de dos mil uno.

El criterio que antecede tiene su sustento en que una norma legal rige todos los hechos que durante el lapso de su vigencia ocurren en concordancia con sus supuestos. Ahora bien, en el campo del derecho pueden darse diversas hipótesis respecto de los momentos en que se actualizan esos supuestos y las consecuencias jurídicas concomitantes a aquéllos, de lo cual depende que la aplicación de una norma se encuentre apegada a la garantía constitucional en estudio; tales hipótesis son las siguientes:

- 1. Cuando durante la vigencia de una ley se actualizan los supuestos y las consecuencias jurídicas que establece esa norma y con posterioridad a ello entra en vigor una nueva disposición legal que varía aquellos supuestos y consecuencias, la nueva ley ya no podrá aplicarse a los supuestos y consecuencias de la anterior disposición, pues de lo contrario se violaría la garantía individual de mérito, atento a que antes de la vigencia de la nueva norma ya se habían realizado tanto los supuestos como las consecuencias*

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

señaladas en la ley sustituida, por lo que obviamente ya no es posible que la nueva disposición suprima, modifique o condicione los susodichos supuestos y consecuencias;

- 2. También puede presentarse la hipótesis en la que una norma legal establezca un supuesto y varias consecuencias sucesivas; así, dentro de la vigencia, una nueva ley no podría variar las ya ejecutadas, pues de lo contrario violaría la garantía de irretroactividad de la ley, como acontece en la hipótesis expuesta en primer término;*
- 3. Ahora bien, puede suceder que la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior, que no se produjeron durante su vigencia, no dependa de la realización de supuestos previstos en esa ley, ocurridos después de que la nueva disposición entró en vigor, sino que tal realización estaba solamente diferida en el tiempo, ya sea por el establecimiento de un plazo o término específico, o simplemente porque la realización de esas consecuencias era sucesiva o continuada; en este caso la nueva disposición tampoco deberá suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, por la razón sencilla de que estas consecuencias no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley, caso que también se asemeja a la primera hipótesis expuesta.*
- 4. Sin embargo, si para la ejecución o realización de las consecuencias previstas en la disposición anterior, pendientes de producirse, es necesario que los supuestos señalados en la misma se realicen después de que entró en vigor la nueva norma, tales consecuencias deberán ejecutarse conforme a lo establecido en ésta, atento que antes de la vigencia de dicha ley no se actualizaron ninguno de los componentes de la ley anterior, esto es, los supuestos y las consecuencias que no se habían ejecutado cuando la norma anterior estaba en vigor, y su realización acontece bajo la vigencia de la nueva disposición, desde luego ésta es la aplicable para la ejecución de los deberes y derechos correspondientes.*

Precisado lo anterior, se pone de manifiesto que para estar en posibilidad de determinar si una disposición normativa es violatoria de lo dispuesto

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

por el artículo 14 de la Constitución General de la República, con base en la teoría de los componentes de la norma, es menester tener en cuenta los distintos momentos en que se realiza el supuesto o supuestos jurídicos, la consecuencia o consecuencias que de ellos derivan y la fecha en que entra en vigor la nueva disposición.

*Así las cosas, es preciso señalar que el Estatuto anterior, tuvo vigencia del 10 de marzo de 2016 hasta el 23 de julio de 2020 y que los efectos de mi designación para ocupar el cargo de * [REDACTED], tuvo lugar a partir del día 1 de marzo de 2020, bajo el régimen estatutario anterior, conforme al cual, se disponía lo siguiente:*

Artículo 202. *El Cambio de Adscripción o Rotación a petición del interesado deberá sujetarse a lo siguiente:*

- I. Se solicitará por escrito del interesado a través de los medios que para tal efecto establezca la DESPEN;*
- II. Las solicitudes deberán presentarse en los plazos o periodos que para tal efecto establezca la DESPEN;*
- III. El Miembro del Servicio que solicite su Cambio de Adscripción o Rotación deberá contar, como mínimo, con un año de antigüedad en su actual cargo o puesto y adscripción; además deberá tener por lo menos experiencia en un proceso electoral federal en el Instituto;*
- IV. Que se realice a un cargo o puesto con un mismo nivel salarial u homologo a este, conforme a la tabla de equivalencias prevista en los lineamientos en la materia;*
- V. Que no implique ascenso ni Promoción, y*
- VI. Durante proceso electoral federal, no se autorizará el Cambio de Adscripción ni de Rotación a petición del interesado.*

Del análisis de la norma, se puede distinguir seis supuestos que debían concurrir conforme al régimen vigente al tiempo de mi designación en el cargo, para que pudiera actualizarse la consecuencia jurídica consistente en el cambio de adscripción a petición de persona interesada, a saber:

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

<i>Supuesto jurídico</i>	<i>Consecuencia jurídica</i>	<i>Vinculación del supuesto, con algún plazo o término específico</i>
A. Solicitud por escrito del interesado a través de los medios que establezca la DESPEN.	<p style="text-align: center;">SI A+B+C+D+E+F</p> <p style="text-align: center;">Entonces:</p> <p style="text-align: center;">Cambio de adscripción a petición de persona interesada</p>	Sujeto al plazo que establezca la DESPEN.
B. Solicitud presentada en los plazos o periodos que establezca la DESPEN.		Sujeto al plazo que establezca la DESPEN
C. Un año de antigüedad en el cargo o puesto y adscripción y por lo menos experiencia en un proceso electoral federal en el Instituto.		Sujeto al plazo de un año y de un proceso electoral.
D. Cargo o puesto con un mismo nivel salarial u homólogo a este.		Se califica con la solicitud.
E. Que no implique ascenso ni Promoción.		Se califica con la solicitud.
F. Que no se realice durante proceso electoral federal.		Sujeto a plazos que no correspondan al proceso electoral.





Ahora bien, el supuesto número 3 al que se refiere la jurisprudencia **P./J. 123/2001**, consiste en lo siguiente:

“También puede suceder que la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior, que no se produjeron durante su vigencia, no dependa de la realización de supuestos previstos en esa ley, ocurridos después de que la nueva disposición entró en



RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

vigor, sino que tal realización estaba solamente diferida en el tiempo, ya sea por el establecimiento de un plazo o término específico, o simplemente porque la realización de esas consecuencias era sucesiva o continuada; en este caso la nueva disposición tampoco deberá suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, por la razón sencilla de que estas consecuencias no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley, caso que también se asemeja a la primera hipótesis expuesta”.

*Una vez identificados los supuestos y la consecuencia del artículo 202 del Estatuto anterior, así como el supuesto 3 de la jurisprudencia **P./J. 123/2001**, la aplicación de la jurisprudencia al caso concreto, resulta de la siguiente forma:*

<i>Jurisprudencia P./J. 123/2001</i>	<i>Aplicación de jurisprudencia al caso concreto</i>
 Puede suceder que la realización de alguna o algunas consecuencias de la ley anterior que no se produjeron durante su vigencia...	 La realización del cambio de adscripción (consecuencia) del Estatuto anterior que no se produjo durante su vigencia...
 No dependa de la realización de supuestos previstos en esa ley ocurridos después de que la nueva disposición entró en vigor, sino que tal realización estaba solamente diferida en el tiempo, ya sea por el establecimiento de un plazo o término específico, o simplemente porque la realización de esas consecuencias era sucesiva o continuada...	 No depende de la realización de los requisitos (supuestos) previstos en ese Estatuto ocurridos después de que el nuevo Estatuto entró en vigor, sino que tal realización estaba solamente diferida en el tiempo, por el establecimiento de un plazo (presentación de solicitud en el plazo definido por la DESPEN, 1 año de antigüedad en el cargo y adscripción y experiencia en un proceso electoral)...

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

 <p>En este caso la nueva disposición tampoco deberá suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, por la razón sencilla de que estas consecuencias no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley.</p>	 <p>En este caso el nuevo Estatuto no deberá suprimir, modificar o condicionar el cambio de adscripción (consecuencia) no realizado, por la razón sencilla de que este cambio de adscripción (consecuencia) no está supeditado a las modalidades señaladas en el nuevo Estatuto.</p>
---	--

Por su lado, el acto impugnado resuelve como improcedente la petición formulada el día 15 de febrero del presente año, sustentándose en lo siguiente:

12. Por consecuente, la solicitud de cambio de adscripción por la vía de la permuta de los concursantes debe ser bajo el fundamento, términos y requisitos que establezcan las disposiciones vigentes al momento de realizarse [...] De lo anterior, se advierte que ambas personas miembros del Servicio incumplen con los requisitos previstos en las fracciones I y II del artículo 237 del Estatuto en concordancia con el artículo 39, fracción IV, de los Lineamientos, y Apartado C de la Convocatoria, motivo por el cual la solicitud resulta improcedente.

Esto es, la responsable sustenta su determinación en los artículos 237, fracciones I, II y V, del Estatuto; 39, fracción IV, de los Lineamientos; y el Apartado C, de la Convocatoria, los cuales disponen lo siguiente:

Estatuto.

Artículo 237. *La solicitud de cambio de adscripción y/o rotación a petición de persona interesada, se realizará en los plazos y términos que para el efecto establezca la DESPEN en la convocatoria respectiva, considerando al menos, los siguientes requisitos:*

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

- I. Que la persona interesada cuenta como mínimo con tres años de permanencia en su actual cargo o puesto y adscripción;*
- II. Que la persona interesada cuente con la titularidad en el nivel del cargo o puesto que ocupa;*
- [...]*
- V. Que la persona interesada haya acreditado satisfactoriamente la profesionalización correspondiente en el ciclo trianual inmediato anterior.*

Lineamientos.

Artículo 39. *Las solicitudes de cambio de adscripción o rotación serán improcedentes cuando:*

- IV. No cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 237 del Estatuto;*

Convocatoria.

C. Requisitos.

Conforme a lo previsto en el artículo 237 del Estatuto, el personal del Servicio interesado en un cambio de adscripción o rotación a petición de persona interesada, podrá solicitarlo siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:

- I. Contar como mínimo con tres años de permanencia en su actual cargo o puesto y adscripción.*
- II. Contar con la titularidad en el nivel del cargo o puesto que ocupa.*
- III. Que el cargo o puesto solicitado corresponda al nivel del cargo o puesto que ocupa.*
- IV. Haya acreditado satisfactoriamente la profesionalización, al momento del registro de su solicitud.*
- V. No haber sido separado del Servicio o del Instituto por alguno de los supuestos previstos en las fracciones I o del VI a la XII del artículo 243, dentro del año inmediato anterior a la emisión de la presente Convocatoria.*
- VI. Cumplir los requisitos del perfil del cargo o puesto solicitado, conforme al Catálogo del Servicio para el sistema del Instituto.*

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

Ahora, corresponde realizar el análisis de las disposiciones invocadas por la autoridad responsable, a la luz de la jurisprudencia **P./J. 123/ 2001**, con la finalidad de dilucidar si suprimen, modifican o condicionan las consecuencias no realizadas (cambio de adscripción) del Estatuto anterior:

Análisis de la aplicación del artículo 237 del Estatuto vigente	Aplicación de jurisprudencia 123/2001	¿Suprime, modifica o condiciona el cambio de adscripción?
<p>Artículo 237. La solicitud de cambio de adscripción y/o rotación a petición de persona interesada, se realizará en los plazos y términos que para el efecto establezca la DESPEN en la convocatoria respectiva, considerando al menos, los siguientes requisitos:</p>	<p><u>... en este caso la nueva disposición tampoco deberá suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, por la razón sencilla de que estas consecuencias no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley.</u></p>	<p>No suprime, modifica o condiciona el cambio de adscripción.</p>
<p>I. Que la persona interesada cuente como mínimo con tres años de permanencia en su actual cargo o puesto y adscripción;</p>		<p>Su aplicación al caso concreto, modifica la consecuencia de la norma anterior, al ampliar de un año de antigüedad en el cargo o puesto y adscripción, a tres años de permanencia en el cargo o puesto de adscripción</p>

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

<i>II. Que la persona interesada cuente con la titularidad en el nivel del cargo o puesto que ocupa; [...]</i>		<i>Su aplicación al caso concreto condiciona la consecuencia de la norma anterior, al introducir el requisito de titularidad en el nivel del cargo o puesto</i>
<i>V. Que la persona interesada haya acreditado satisfactoriamente la profesionalización correspondiente en el ciclo trianual inmediato anterior.</i>		<i>Su aplicación al caso concreto condiciona la consecuencia de la norma anterior, al incluir la acreditación de la profesionalización correspondiente en el ciclo trianual anterior.</i>

Además de la aplicación de las fracciones I, II y V, del artículo 237 del Estatuto, la autoridad responsable invoca el artículo 39, fracción IV, de los Lineamientos, en la cual se remite al artículo 237 del Estatuto, analizado en la tabla anterior.

*Asimismo, la autoridad responsable invoca el apartado C, de la Convocatoria, por lo que también resulta pertinente su análisis a la luz de la jurisprudencia **P./J. 123/2001**, con la finalidad de dilucidar si suprimen, modifican o condicionan las consecuencias no realizadas (cambio de adscripción) del Estatuto anterior:*

Análisis de la aplicación del apartado C de la Convocatoria	de la jurisprudencia P./J. 123/2001	¿Suprime, modifica o condiciona el cambio de adscripción?
C. Requisitos.		No suprime, modifica o condiciona el

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

Conforme a lo previsto en el artículo 237 del Estatuto, el personal del Servicio interesado en un cambio de adscripción o rotación a petición de persona interesada, podrá solicitarlo siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:		cambio de adscripción.
I. Contar como mínimo con tres años de permanencia en su actual cargo o puesto y adscripción.	<u>... en este caso la nueva disposición tampoco deberá suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, por la razón sencilla de que estas consecuencias no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley.</u>	Su aplicación al caso concreto, modifica la consecuencia de la norma anterior, al ampliar de un año de antigüedad en el cargo o puesto y adscripción, a tres años de permanencia en el cargo o puesto y adscripción.
II. Contar con la titularidad en el nivel del cargo o puesto que ocupa.		Su aplicación al caso concreto condiciona la consecuencia de la norma anterior, al introducir el requisito de titularidad en el nivel del cargo o puesto.
III. Haya acreditado satisfactoriamente la profesionalización, al momento del registro de su solicitud.		Su aplicación al caso concreto condiciona la consecuencia de la norma anterior, al introducir el

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

		requisito acreditación de profesionalización, al momento del registro de solicitud.
--	--	--

*Con el análisis realizado, se da cuenta que la aplicación, al caso concreto, de los artículos 237, fracciones I, II y V, del Estatuto; 39, fracción IV, de los Lineamientos; y el Apartado C, de la Convocatoria; transgrede el principio de irretroactividad, a la luz de la jurisprudencia **P./J. 123/2001**.*

*Cabe señalar que el análisis de la aplicación de las normas invocadas por la autoridad responsable, a la luz de la jurisprudencia **P./J. 123/2001**, es pertinente y necesario, considerando los siguientes acontecimientos y la temporalidad de los mismos:*

- 1. La entrada en vigor del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, en marzo de 2015;*
- 2. La fecha de designación para ocupar el cargo de Vocal Ejecutivo Distrital del Servicio Profesional Electoral Nacional, en febrero de 2020;*
- 3. El otorgamiento de nombramiento y toma de protesta como **
, en marzo de 2020.
- 4. La aprobación y entrada en vigor de la reforma al Estatuto, en julio de 2020;*
- 5. El inicio del primer ciclo de transición conforme al artículo Séptimo transitorio del Estatuto, en septiembre de 2020;*
- 6. La aprobación de Lineamientos para la Planeación y Evaluación del Servicio Profesional Electoral Nacional, en enero de 2021;*
- 7. El cumplimiento de un año de antigüedad en el actual cargo o puesto y adscripción, en marzo de 2021;*
- 8. La aprobación del Plan correspondiente al ciclo de Transición 2020-2022 del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, en marzo de 2021;*
- 9. El cumplimiento de experiencia en un proceso electoral federal en el Instituto, en junio de 2021;*

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

10. La aprobación de los Lineamientos para cambios de adscripción y rotación del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, en julio de 2021; y
11. La emisión de la Convocatoria en febrero de 2022, en febrero de 2022, dentro del ciclo de transición previsto en el artículo Séptimo transitorio del Estatuto.

Lo anterior se puede representar gráficamente de la siguiente manera:



[...] sic

Es **INFUNDADO** el agravio de acuerdo con lo siguiente:

En primer término, es menester traer a colación lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 14 de la Constitución:

Artículo 14. *A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.*

La anterior disposición constitucional contempla la garantía de irretroactividad de la ley o principio *tempus regit actum* (el tiempo rige el acto), que regula la validez temporal de las normas, su vigencia, entendida como la condición que les permite producir consecuencias jurídicas; contiene por tanto, una de las reglas esenciales para el funcionamiento del orden jurídico.

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

Esa validez temporal se encuentra estrechamente vinculada con los principios de legalidad y seguridad jurídicas, porque determina la operatividad del sistema legal, así como los efectos jurídicos que producen las normas, esto es, la certeza de que las normas futuras no modificarán situaciones legales surgidas bajo el amparo de una norma vigente en un momento determinado; en otras palabras, con la incolumidad de las ventajas, beneficios o situaciones concebidas bajo un régimen previo a aquél que innove respecto a un determinado supuesto o trate un caso similar de modo distinto. A su vez, la capacidad de operar de la norma se fundamenta en el principio de certeza jurídica.

En ese sentido, la retroactividad se encuentra vinculada con la operación en el tiempo de una norma, implica la eficacia de las disposiciones sobre consecuencias jurídicas derivadas de hechos acaecidos previamente a su expedición, es decir, el precepto se aplica a hechos consumados durante la vigencia de una disposición anterior o a situaciones jurídicas que se encuentran aún en proceso de verificación, en relación con los efectos producidos antes de la entrada en vigor de la nueva ley.

Por tanto, dicho precepto constitucional contempla la regla general de que las normas jurídicas son expedidas con el objeto de regular situaciones presentes y futuras, lo que conlleva la prohibición de aplicarse a situaciones previas al inicio de su vigencia, cuando ello depare una afectación al gobernado.

En nuestro orden jurídico, cobra especial relevancia la teoría de los derechos adquiridos, según la cual una ley es retroactiva cuando desconoce derechos adquiridos conforme a una ley anterior, no lo es si implica el desconocimiento de meras expectativas de derecho. Los derechos adquiridos se definen como aquellos que han entrado al dominio del gobernado, forman parte de él y no pueden ser privados de ellos.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver, entre otras, las acciones de inconstitucionalidad 80/2008 y 88/2008 con sus acumuladas 90/2008 y 91/2008, sostuvo que el derecho adquirido es aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, a su dominio o a su haber jurídico, en tanto la expectativa de derecho la concibe como la pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho; en otras palabras, el derecho adquirido constituye una realidad y la expectativa de derecho corresponde a algo que no se ha materializado.

En este mismo sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que lleva por rubro y texto:

DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES³.

El derecho adquirido se puede definir como el acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y ese hecho no puede afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; la expectativa del derecho es una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, conforme a la legislación vigente en un momento determinado.

De conformidad con lo anterior, se determina que no se pueden afectar o modificar derechos adquiridos durante la vigencia de una ley anterior, ya que se regirán siempre por la ley al amparo de la cual nacieron y entraron a formar parte del patrimonio de las personas, aun cuando haya cesado su vigencia al haber sido substituida por otra norma; en contraparte, una nueva ley podrá afectar simples expectativas o esperanzas de gozar de un derecho que aún no ha nacido en el momento en que entró en vigor, sin que se considere retroactiva en perjuicio del gobernado.

Por tanto, la ley no debe perturbar situaciones jurídicas consumadas o constituidas con anterioridad (de las que derivan derechos y obligaciones), ni las consecuencias que de estas últimas se sigan produciendo en los casos en que el desconocimiento o afectación de esas consecuencias impliquen necesariamente la alteración de la propia situación jurídica o del hecho adquisitivo del derecho, puesto que únicamente podría influir en las consecuencias aún no producidas “*facta pendentia*” (hechos pendientes) cuando con ello no se destruya o afecte en perjuicio del interesado la situación jurídica consumada generadora de su derecho.

Dicho lo anterior, en el caso concreto, el recurrente alega la contravención al principio de irretroactividad al considerar que le fue aplicado de manera retroactiva, las fracciones I y II del artículo 237 del Estatuto 2020, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2020 y que entró en vigor el 24 del mismo mes y año mencionado, así como el artículo 39, fracción IV, de los Lineamientos, y apartado C de la Convocatoria, pues a su juicio, con la aplicación de dichos

³ Registro digital: 232511, Instancia: Pleno, Séptima Época, Materia (s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 145-150, Primera Parte, página 53, Tipo: Aislada.

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

preceptos normativos, a la luz de la jurisprudencia P./J. 123/ 2001, se modificaron o condicionaron las consecuencias no realizadas al momento de su solicitud de cambio de adscripción a petición de persona interesada, las cuales se preveían en el artículo 202 del Estatuto 2016, mismo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2016 y que tuvo vigencia del 10 de marzo de 2016 al 23 de julio de 2020.

No obstante, contrario a lo alegado por el recurrente, esta Junta General Ejecutiva considera que la jurisprudencia P./J. 123/ 2001 en la que se contempla la teoría de los componentes de la norma, no resulta aplicable al caso concreto, pues las consecuencias no realizadas al momento de su solicitud de cambio de adscripción a petición de persona interesada, las cuales se preveían en el artículo 202 del Estatuto 2016, eran simples expectativas de derecho, lo que se explica a continuación.

El recurrente fue designado para ocupar el cargo de * [REDACTED], Puebla, a partir del 1 de marzo de 2020 (lo que se acredita con los oficios INE/SE-0212/2022 e INE/SE-0211/2022 del 25 de febrero de 2020 suscritos por el Secretario Ejecutivo, mediante los cuales se otorgó el nombramiento y área de adscripción al recurrente, documentos que fueron ofrecidos por el recurrente como pruebas en el presente medio de impugnación), momento en que se encontraba vigente el Estatuto 2016.

En ese sentido, para el caso que nos ocupa, el artículo 202 del Estatuto 2016, disponía lo siguiente:

Artículo 202. *El Cambio de Adscripción o Rotación a petición del interesado deberá sujetarse a lo siguiente:*

- I. Se solicitará por escrito del interesado a través de los medios que para tal efecto establezca la DESPEN;*
- II. Las solicitudes deberán presentarse en los plazos o periodos que para tal efecto establezca la DESPEN;*
- III. El Miembro del Servicio que solicite su Cambio de Adscripción o Rotación deberá contar, como mínimo, con un año de antigüedad en su actual cargo o puesto y adscripción; además deberá tener por lo menos experiencia en un proceso electoral federal en el Instituto;*

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

IV. Que se realice a un cargo o puesto con un mismo nivel salarial u homologo a este, conforme a la tabla de equivalencias prevista en los lineamientos en la materia;

V. Que no implique ascenso ni Promoción, y

VI. Durante proceso electoral federal, no se autorizará el Cambio de Adscripción ni de Rotación a petición del interesado.

De lo anterior se desprende que, para poder estar en posibilidad de solicitar el cambio de adscripción a petición de persona interesada bajo las disposiciones del Estatuto 2016, uno de los requisitos era que el miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional contara con un año de antigüedad en su cargo o puesto y adscripción.

En el caso concreto, los solicitantes del cambio de adscripción a petición de persona interesada acreditarían el requisito antes mencionado, hasta el 16 de enero de 2021 para el caso de la * [REDACTED], y hasta el 1 de marzo de 2021 para el caso del recurrente, no obstante, el Estatuto 2016 tuvo vigencia hasta el 23 de julio de 2020, por lo que al no haberse cumplido el referido requisito durante la vigencia del Estatuto 2016, el derecho no se materializó, quedando en una expectativa de derecho.

Es importante precisar que el escrito de solicitud de cambio de adscripción a petición de persona interesada se recibió en la DESPEN el 15 de febrero de 2022 (lo que se acredita con la impresión del escrito de petición del 15 de febrero de 2022, firmado electrónicamente por el recurrente y otra funcionaria, así como correo electrónico de remisión dirigido de la cuenta institucional * [REDACTED] a las cuentas institucionales cambioadscrip.despen@ine.mx y * [REDACTED], documentación que fue ofrecida por el recurrente como prueba en el presente medio de impugnación), fecha en que se encontraba vigente el Estatuto 2020, el cual se publicó conforme a Derecho en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2020 y que entró en vigor el 24 del mismo mes y año mencionado.

También es importante destacar que, con la entrada en vigor del Estatuto 2020, **se abrogó el Estatuto 2016 y se derogaron todas las disposiciones que contravinieran el Estatuto 2020 en términos de lo previsto en su transitorio segundo.**

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

Ahora bien, no debe pasar por alto lo siguiente:

- El artículo Sexto Transitorio del Estatuto 2020, prevé que los nombramientos que hayan sido otorgados a las y los miembros del Servicio del sistema del Instituto anteriores a la entrada en vigor de dicho Estatuto, serán adaptados en los términos comprendidos en el mismo, sin que dichas modificaciones afecten sus prestaciones y demás derechos laborales adquiridos.
- El artículo 1, fracciones I y II, del Estatuto 2020, establece que su objeto es reglamentar las disposiciones que señalan los artículos 41, Base V, Apartado D de la Constitución y 201, 202, 203, 204, 205 y 206 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con base en los Lineamientos que se emitan para los mecanismos de selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, cambios de adscripción y rotación, permanencia, incentivos y disciplina, y el sistema de ascenso del personal.
- El artículo 67, fracción XI del Estatuto 2020, establece el derecho del personal del Instituto de solicitar cambios de adscripción o rotación conforme a los requisitos establecidos en el propio Estatuto.
- El artículo 168, párrafo segundo, del Estatuto 2020, establece que la DESPEN regulará la organización y funcionamiento del Servicio de conformidad con la Constitución, la Ley, el Estatuto, los acuerdos, los lineamientos y las demás disposiciones que emitan el Consejo General y la Junta General Ejecutiva.
- El artículo 236 del Estatuto 2020, establece que el cambio de adscripción y/o rotación a petición de persona interesada es la movilidad horizontal, geográfica o funcional, en un mismo nivel, con base en el mérito.
- El artículo 237 del Estatuto 2020, establece que la solicitud de cambio de adscripción y/o rotación a petición de persona interesada, se realizará en los plazos y términos que para el efecto establezca la DESPEN en la convocatoria respectiva, considerando al menos, los siguientes requisitos:
 - I. Que la persona interesada cuente como mínimo con tres años de permanencia en su actual cargo o puesto y adscripción;

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

- II. Que la persona interesada cuente con la titularidad en el nivel del cargo o puesto que ocupa;
- III. Que el cargo o puesto solicitado corresponda al nivel del cargo o puesto que ocupa;
- IV. Que la persona interesada cumpla los requisitos VIII y IX del artículo 201 del presente Estatuto, y
- V. Que la persona interesada haya acreditado satisfactoriamente la profesionalización correspondiente en el ciclo trianual inmediato anterior.

Conforme a lo antes mencionado, se considera que la solicitud de cambio de adscripción a petición de persona interesada formulada por el recurrente y otra funcionaria, carece de sustento y legalidad como lo resolvió la DESPEN, pues dicha petición se basa en la aplicación retroactiva de la norma que otorga el derecho al personal del Servicio Profesional Electoral Nacional de solicitar un cambio de adscripción o rotación con base en las disposiciones del Estatuto 2016. No obstante, como se indicó anteriormente, para la aplicación retroactiva de una norma es necesario que, con la entrada en vigor del Estatuto 2020, se hayan modificado o revocado derechos que el personal del Servicio hubiera adquirido durante la aplicación del Estatuto 2016, lo cual no sucedió, ya que con base en el artículo 78, fracción XI; en concordancia con el artículo 202 del Estatuto 2016, el derecho del personal del Servicio de solicitar un cambio de adscripción y/o rotación a petición de persona interesada estaba sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos.

Por tanto, toda vez que el recurrente no ejerció su derecho a solicitar un cambio de adscripción o rotación durante la vigencia del Estatuto 2016, con la entrada en vigor del Estatuto 2020 no se le violentó, modificó, o privó de ningún derecho adquirido; sirve de sustento la Tesis Jurisprudencial 2a./J. 87/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido se transcriben a continuación:

RETROACTIVIDAD DE LA LEY. ES DIFERENTE A SU APLICACIÓN RETROACTIVA⁴.

⁴ Registro digital: 181024, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materia (s): Común, Tesis: 2a./J.87/2004, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Julio de 2004, página 415, Tipo: Jurisprudencia.

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

El análisis de la retroactividad de las leyes requiere el estudio de los efectos que una norma tiene sobre situaciones jurídicas definidas al amparo de una ley anterior o sobre los derechos adquiridos por los gobernados con anterioridad a su entrada en vigor, verificando si la nueva norma los desconoce, es decir, ante un planteamiento de esa naturaleza, el órgano de control de la constitucionalidad se pronuncia sobre si una determinada disposición de observancia general obra sobre el pasado, desconociendo tales situaciones o derechos, lo que implica juzgar sobre el apego de un acto materialmente legislativo a lo dispuesto por el artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que las leyes no deben ser retroactivas. En cambio, el análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley implica verificar si el acto concreto se lleva a cabo dentro de su ámbito temporal de validez sin afectar situaciones jurídicas definidas o derechos adquiridos por el gobernado con anterioridad a su entrada en vigor.

Amparo directo en revisión 479/2000. Amelia Ocegüera Vázquez. 19 de mayo de 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.

Amparo directo en revisión 1026/2000. Luis Felipe Cruz Carranco. 11 de octubre de 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Andrea Zambrana Castañeda.

Amparo en revisión 607/2000. Héctor Adalberto García Noriega. 11 de mayo de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Minerva Cifuentes Bazán.

Amparo directo en revisión 1537/2001. Mireya Elisa Morales Villegas y otros. 11 de enero de 2002. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo.

Amparo directo en revisión 898/2003. José Francisco Macías Rosales. 19 de septiembre de 2003. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Javier Arnaud Viñas.

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

Tesis de jurisprudencia 87/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintitrés de junio de dos mil cuatro.

En razón de lo anterior, se sostiene que con la aplicación de las fracciones I y II del artículo 237 del Estatuto 2020, así como del artículo 39, fracción IV, de los Lineamientos y del apartado C de la Convocatoria, no se contravino el principio de irretroactividad de la ley, toda vez que es la norma aplicable, en virtud de que la solicitud del recurrente no se ejercitó durante la vigencia del Estatuto 2016 y en consecuencia únicamente se trató de una expectativa de derecho, el ser objeto de un cambio de adscripción a petición de persona interesada.

En ese sentido, al reconocer la nueva norma el derecho de los miembros del Servicio a solicitar cambios de adscripción, las solicitudes que se generen en ejercicio de esa facultad, deben de cumplir los requisitos establecidos en dicho ordenamiento, pues de acoger la pretensión del recurrente, las solicitudes de cambios de adscripción de los miembros del servicio se analizarían a la luz de la norma aplicable en la fecha de su ingreso al Servicio y no atendiendo a la vigencia de la norma, esto es, para cada convocatoria se aplicaría una multitud de ordenamientos no vigentes, lo cual a todas luces resulta por demás ilógico y carente de seguridad y certeza jurídicas para quienes participen, en virtud de que no participarían en igualdad de condiciones, de ahí lo infundado del agravio.

2) Segundo agravio en análisis:

[...]

4. *Transgresión al principio de interpretación conforme y de interpretación más favorable a la persona.*

Conforme al principio pro persona, debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos fundamentales e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida si se busca establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, por lo que ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios.

Este principio se relaciona con la interpretación conforme, por la cual, antes de considerar inconstitucional una norma jurídica, deben agotarse todas las posibilidades de encontrar en ella un significado que la haga

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

compatible con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, de ser posibles varias interpretaciones de la disposición, debe preferirse la que salve la aparente contradicción con la Norma Fundamental.

En ese sentido, un presupuesto indispensable para que esas técnicas hermenéuticas puedan aplicarse es que la asignación de significado a la norma jurídica sea fruto de una interpretación válida, es decir, la derivada de algún método de interpretación jurídica, ya sea el gramatical, el sistemático, el funcional, el histórico o algún otro.

Este criterio es sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que se cita a continuación:

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 2018696

Instancia: Primera Sala

Décima Época

Materia(s): Constitucional

Tesis: 1a. CCLXIII/2018 (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018. Tomo I, página 337

Tipo: Aislada

INTERPRETACIÓN CONFORME Y PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU APLICACIÓN TIENE COMO PRESUPUESTO UN EJERCICIO HERMENÉUTICO VÁLIDO.

Conforme al principio pro persona, debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos fundamentales e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida si se busca establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, por lo que ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios. Este principio se relaciona con la interpretación conforme, por la cual, antes de considerar inconstitucional una norma jurídica, deben agotarse todas las

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

posibilidades de encontrar en ella un significado que la haga compatible con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, de ser posibles varias interpretaciones de la disposición, debe preferirse la que salve la aparente contradicción con la Norma Fundamental. En ese sentido, un presupuesto indispensable para que esas técnicas hermenéuticas puedan aplicarse es que la asignación de significado a la norma jurídica sea fruto de una interpretación válida, es decir, la derivada de algún método de interpretación jurídica, ya sea el gramatical, el sistemático, el funcional, el histórico o algún otro. Así, la interpretación conforme o la aplicación del principio pro persona no puede realizarse a partir de atribuir a la norma un significado que no tiene conforme a alguno de los métodos de interpretación jurídica, porque en ese caso, la norma sujeta a escrutinio ya no será la misma, sino que habría sido cambiada por otra.

Amparo directo en revisión 7326/2017. Integra Soluciones Informáticas, S.A. de C.V. 16 de mayo de 2018. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mónica Cacho Maldonado.

Esta Tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Ahora bien, en el caso concreto, la autoridad responsable realizó una interpretación restrictiva de los artículos Séptimo transitorio del Estatuto, y Sexto transitorio de los Lineamientos, al sostener lo siguiente:

Al respecto, debe decirse que tal aseveración se encuentra descontextualizada, derivado de que, de la lectura integral del propio artículo Transitorio y su correlativo Sexto de los Lineamientos, se obtiene que el primer ciclo íntegro será de septiembre de 2022 a agosto de 2025 (en función del proceso electoral federal) y que para efectos de los cambios de adscripción y rotación a petición de persona interesada, se tomará en consideración la titularidad del cargo o puesto que ocupe la persona solicitante, así como los avances obtenidos en su profesionalización, “hasta en tanto se cuente con información de un ciclo trianual completo”.

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

En este sentido, resulta evidente que para las solicitudes de cambios de adscripción y rotación debe tomarse en consideración el ciclo trianual comprendido de septiembre de 2022 a agosto de 2025 para efectos del cumplimiento del requisito previsto en la fracción V del artículo 237 del Estatuto.

[Énfasis añadido]

En relación con el primer párrafo que se transcribe y con la finalidad de realizar un análisis minucioso del contenido de los artículos Séptimo transitorio del Estatuto y Sexto transitorio de los Lineamientos, es necesario, en primer lugar, poner de relieve su contenido haciendo una interpretación gramatical del mismo:

Artículo Séptimo transitorio del Estatuto.

Séptimo. *En virtud de que los ciclos trianuales se organizan en función del proceso electoral federal, el primer **ciclo íntegro** será de septiembre de 2022 a agosto de 2025. Para efectos de la carrera profesional electoral en el Instituto se contemplará como un primer **ciclo de transición** el que se extiende de septiembre de 2020 a agosto de 2022.*

Interpretación gramatical.

Mediante la interpretación gramatical se pretende, con ayuda de las reglas de la gramática y del uso del lenguaje, indagar el significado de los términos en que se expresa una norma. En este tipo de interpretación se debe considerar no solo el significado vulgar de los correspondientes términos, sino también su significado técnico y en especial su significado jurídico.

Bajo ese contexto, se tienen los siguientes términos:

Íntegro:

- 1. adj. Que no carece de ninguna de sus partes.*
- 2. Total, complejo, entero.*

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

Transición:

- 1)** f. Acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto.
- 2)** Cambio, mudanza, mutación, tránsito, transformación.

De lo anterior, se desprende lo siguiente:

Artículo Séptimo transitorio del Estatuto	Interpretación gramatical
Séptimo. En virtud de que los ciclos trianuales se organizan en función del proceso electoral federal, el primer ciclo íntegro será de septiembre de 2022 a agosto de 2025. Para efectos de la carrera profesional electoral en el Instituto se contemplará como un primer ciclo de transición el que se extiende de septiembre de 2020 a agosto de 2022.	Séptimo. En virtud de que los ciclos trianuales se organizan en función del proceso electoral federal, el primer ciclo completo (que no carece de ninguna de sus partes) será de septiembre de 2022 a agosto de 2025. Para efectos de la carrera profesional electoral en el Instituto se contemplará como un primer ciclo de cambio (para pasar de un modo de ser o estar, a otro distinto) , el que se extiende de septiembre de 2020 a agosto de 2022.

Es decir, en una interpretación gramatical, la segunda parte del artículo Séptimo transitorio del Estatuto dispone que, de septiembre de 2020 a agosto de 2022, se contempla como un ciclo de cambio para pasar de un modo de ser o estar, a otro distinto, o mejor dicho, un ciclo de cambio para pasar de un Estatuto a otro.

Artículo Sexto transitorio de los Lineamientos.

Sexto. Para efectos de los cambios de adscripción y rotación a petición de persona interesada que se realicen en términos de los presentes Lineamientos, se tomará en consideración la titularidad del cargo o puesto que ocupe la persona solicitante y los avances

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

*obtenidos en su profesionalización, **hasta en tanto** se cuente con información de un ciclo trianual completo.*

Interpretación gramatical.

Continuando con la interpretación gramatical de los preceptos en cuestión, se obtiene lo siguiente:

Hasta:

Prep. C. Rica, El Salv., Guat., Hond., Méx. y Nic. No antes de. Llegaré hasta las dos.

Hasta tanto, o hasta tanto que

1. locs. conjunts. En espera de que se produzca lo expresado a continuación. Mandaron un interino hasta tanto se incorpore el titular.

De lo anterior, se concluye lo siguiente:

Artículo Sexto transitorio de los Lineamientos	Interpretación gramatical
Sexto. Para efectos de los cambios de adscripción y rotación a petición de persona interesada que se realicen en términos de los presentes Lineamientos, se tomará en consideración la titularidad del cargo o puesto que ocupe la persona solicitante y los avances obtenidos en su profesionalización, hasta en tanto se cuente con información de un ciclo trianual completo.	Sexto. Paras efectos de los cambios de adscripción y rotación a petición de persona interesada que se realicen en términos de los presentes Lineamientos, se tomará en consideración la titularidad del cargo o puesto que ocupe la persona solicitante y los avances obtenidos en su profesionalización, no antes de (en espera de) que se cuente con información de un ciclo trianual completo.

Esto es, en una interpretación gramatical, el artículo Sexto transitorio de los Lineamientos dispone que, para efectos de los cambios de adscripción a petición de persona interesada, se tomará en consideración

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

*la titularidad del cargo o puesto y los avances obtenidos en la profesionalización, **no antes** del ciclo trianual completo (agosto de 2025).*

*En otros términos, la consideración de la titularidad del cargo o puesto y los avances en la profesionalización, para efectos de los cambios de adscripción a petición de persona interesada, debe **esperar** a que se cuente con un ciclo trianual completo (agosto de 2025). En este aspecto se impone señalar que la espera, se refiere a la consideración de la titularidad del cargo o puesto y los avances en la profesionalización, no en el cambio de adscripción por sí mismo.*

No obstante lo anterior, la interpretación que realiza la responsable es restrictiva, toda vez que considera que para las solicitudes de cambios de adscripción y rotación debe tomarse en consideración el ciclo trianual comprendido de septiembre de 2022 a agosto de 2025 para efectos del cumplimiento del requisito previsto en la fracción V del artículo 237 del Estatuto, cuando la norma, lo que señala es que se tomará en consideración la titularidad del cargo o puesto que ocupe la persona solicitante y los avances obtenidos en su profesionalización, no antes de (en espera de) que se cuente con información de un ciclo trianual completo.

En el siguiente cuadro pueden observarse las diferencias con mayor claridad.

Artículo Sexto transitorio de los Lineamientos	Interpretación restrictiva de la responsable	Efectos
Sexto. Para efectos de los cambios de adscripción y rotación a petición de persona interesada que se realicen en términos de los presentes Lineamientos, se tomará en consideración la titularidad del cargo o puesto que ocupe la	“debe tomarse en consideración el ciclo trianual comprendido de septiembre de 2022 a agosto de 2025 para efectos del cumplimiento del requisito previsto en la fracción V del artículo 237 del Estatuto”.	No es factible realizar el cambio de adscripción, sino hasta cumplir un ciclo trianual completo (agosto de 2025), para cumplir con el requisito previsto en la fracción V, del artículo 237 del Estatuto

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

<i>persona solicitante y los avances obtenidos en su profesionalización,</i>	<i>Interpretación gramatical, más favorable a la persona</i>	<i>Efectos</i>
<i>hasta en tanto</i> se cuente con información de un ciclo trianual completo.	“Se tomará en consideración la titularidad del cargo o puesto que ocupe la persona solicitante y los avances obtenidos en su profesionalización, <i>no antes de (en espera de)</i> que se cuente con información de un ciclo trianual completo.	La titularidad en el cargo o puesto y los avances en la profesionalización serán considerados, no antes de que se cuente con un ciclo trianual completo. Es decir, para efectos de los cambios de adscripción, la titularidad en el cargo o puesto y los avances en la profesionalización, se considera hasta que transcurra un ciclo trianual completo.

Por lo tanto, la interpretación realizada por la autoridad responsable transgrede el principio de interpretación conforme y de interpretación más favorable a la persona.

[...] sic

De igual forma resulta **INFUNDADO** el agravio segundo, de acuerdo con lo siguiente:

Conforme al principio pro persona, la autoridad debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos fundamentales, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida si se busca establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, por lo que ante la existencia de varias posibilidades de

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

solución a un mismo problema, se debe optar por la norma o interpretación que protege en términos más amplios.

En el caso concreto, el recurrente alega la transgresión al principio de interpretación conforme y de interpretación más favorable a la persona, al señalar que la DESPEN realizó una interpretación restrictiva de los artículos Séptimo transitorio del Estatuto 2020, y Sexto Transitorio de los Lineamientos.

En ese sentido, el recurrente parte de la premisa inexacta de considerar que no se debió considerar la titularidad y los avances en la profesionalización, al no haber transcurrido el periodo que abarca el ciclo trianual, por lo que se debió de eximir de cumplir dicho requisito.

No obstante, a juicio de esta Junta General Ejecutiva, la DESPEN no realizó una interpretación restrictiva de los artículos Séptimo transitorio del Estatuto 2020 y Sexto Transitorio de los Lineamientos, puesto que dichos artículos Transitorios fueron aplicados conforme a la literalidad de lo que establecen, ya que son disposiciones que regulan de manera clara que el primer ciclo íntegro será de septiembre de 2022 a agosto de 2025 (en función del proceso electoral federal) y que para efectos de los cambios de adscripción y rotación a petición de persona interesada, se tomará en consideración la titularidad del cargo o puesto que ocupe la persona solicitante, así como los avances obtenidos en su profesionalización, hasta en tanto se cuente con información de un ciclo trianual completo; por tanto, resulta evidente que para las solicitudes de cambios de adscripción y rotación debe tomarse en consideración el ciclo trianual comprendido de septiembre de 2022 a agosto de 2025 para efectos del cumplimiento del requisito previsto en la fracción V del artículo 237 del Estatuto 2020, por lo que al no cumplirse a la fecha dicho ciclo, lo que se considera es la titularidad y sus avances en el programa de profesionalización.

Máxime que el artículo 237 del Estatuto 2020 contempla como requisitos para la procedencia de las solicitudes de cambios de adscripción a petición de persona interesada, entre otros, que el miembro del Servicio cuente con la titularidad en el cargo o puesto que ocupe, y haber acreditado la profesionalización en el ciclo trianual inmediato anterior, no obstante, al encontrarse en transcurso el citado ciclo y a efecto de permitir la participación de los miembros en igualdad de circunstancias en la convocatoria no se previó cubrirlo, sin embargo si estaban obligados a contar con la titularidad, situación que en el caso del recurrente no acontece, por lo que resulta a todas luces infundada su pretensión de que se le exima de cumplir con los requisitos establecidos en la norma.

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

Por tanto, se sostiene que en el caso concreto, no hubo transgresión al principio de interpretación conforme y de interpretación más favorable a la persona, pues tanto el artículo Séptimo transitorio del Estatuto 2020, como el artículo Sexto Transitorio de los Lineamientos, no dan lugar a una interpretación, ya que son disposiciones que por su claridad deben atenderse a su literalidad.

Aunado a lo anterior, es importante precisar que el principio pro persona tiene como fin primordial, que el operador jurídico opte por la interpretación y aplicación de la norma que conduzca a la optimización de una mejor y más amplia protección de los derechos fundamentales, descartando así las que restrinjan o limiten su ejercicio, por ende, dicha optimización conlleva de ser necesario y posible, a ampliar o extender el sentido y alcance del derecho humano en análisis.

Así, el principio opera como un criterio que rige la selección entre dos o más normas de derechos humanos que, siendo aplicables, tengan contenidos que sea imposible armonizar y que, por tanto, exijan una elección, o realizar la selección cuando existan dos o más posibles interpretaciones admisibles de una norma, de modo que se acoja aquella que adopte el contenido más amplio o la limitación menos restrictiva del derecho, lo cual no puede entenderse como una exigencia para que se resuelva de conformidad con las pretensiones de quien lo invoca.

No obstante, la interpretación de la norma en atención al principio pro persona en modo alguno significa que las autoridades se aparten de las disposiciones contempladas en la normatividad aplicable a cada caso en concreto, de tal manera que se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo, contraviniendo el principio de legalidad que rige el actuar de las autoridades electorales; sirve de sustento la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), de rubro y texto siguiente:

PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES⁵.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial

⁵ Registro digital: 2004748, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: 1a./J. 104/2013 (10a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 906, Tipo: Jurisprudencia.

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes.

Amparo directo en revisión 2504/2012. Adrián Manjarrez Díaz. 7 de noviembre de 2012. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud.

Amparo directo en revisión 3250/2012. Banorte Generali, S.A. de C.V. Actualmente Afore XXI Banorte, S.A. de C.V. 9 de enero de 2013. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud.

Amparo directo en revisión 277/2013. Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 10 de abril de 2013. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud.

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

Amparo en revisión 112/2013. Akai Internacional, S.A. de C.V. 17 de abril de 2013. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud.

Amparo directo en revisión 1320/2013. Motores Diesel de Zacatecas, S.A. de C.V. 29 de mayo de 2013. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.

Tesis de jurisprudencia 104/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veinticinco de septiembre de dos mil trece.

3) Tercer y cuarto agravio en análisis:

[...]

1. Transgresión al principio de congruencia.

Los artículos 8 y 35, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconocen el derecho de petición a favor de cualquier persona para formular una solicitud o reclamación ante cualquier ente público, por escrito, de manera pacífica y respetuosa, y que a la misma le recaiga una contestación en breve término, que resuelva lo solicitado.

*En ese tenor, para tener por colmado el derecho de petición, no basta la emisión de una resolución o acuerdo por parte de la autoridad y su debida notificación al peticionario, sino que al realizar el examen de la respuesta, el juzgador debe salvaguardar el debido proceso, la seguridad jurídica y certeza del peticionario, **corroborando la existencia de elementos suficientes que lleven a la convicción de que la contestación cumple con el requisito de congruencia, consistente en la correspondencia formal entre la solicitud planteada y la respuesta otorgada por la autoridad.***

Dicho criterio es sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis II/2016, que se cita a continuación:

Rafael Guarneros Saldaña

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

vs.

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional y otros
Tesis II/2016

DERECHO DE PETICIÓN. ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA TENERLO COLMADO.- Los artículos 8° y 35, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconocen el derecho de petición a favor de cualquier persona y, en materia política, a favor de ciudadanos y asociaciones políticas, para formular una solicitud o reclamación ante cualquier ente público, por escrito, de manera pacífica y respetuosa, y que a la misma le recaiga una contestación en breve término, que resuelva lo solicitado. En ese tenor, para tener por colmado el derecho de petición, no basta la emisión de una resolución o acuerdo por parte de la autoridad y su debida notificación al peticionario, sino que al realizar el examen de la respuesta, el juzgador debe salvaguardar el debido proceso, la seguridad jurídica y certeza del peticionario, corroborando la existencia de elementos suficientes que lleven a la convicción de que la contestación cumple con el requisito de congruencia, consistente en la correspondencia formal entre la solicitud planteada y la respuesta otorgada por la autoridad, sin que ello implique la revisión de la legalidad material del contenido de la respuesta.

Quinta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-568/2015.—Actor: Rafael Guarneros Saldaña.—Responsables: Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional y otros.—25 de marzo de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el dos de marzo de dos mil dieciséis, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18,

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

2016, páginas 80 y 81.

En ese contexto, en el acto reclamado la autoridad responsable expresa lo siguiente:

*11. Ahora bien, conforme a los considerandos expuestos en los puntos anteriores, la DESPEN estima que el ocurso presentado por usted y por la * [REDACTED] en fecha 15 de febrero de 2022, carece plenamente de sustento y legalidad. Esto en razón de que su petición se basa en la aplicación retroactiva del derecho del personal del Servicio Profesional de solicitar un cambio de adscripción o rotación con base en las disposiciones del Estatuto anterior.*

No obstante, para la aplicación retroactiva de una norma es necesario que, con la entrada en vigor del Estatuto, se hayan modificado o revocado derechos que el personal del Servicio hubiera adquirido con el Estatuto anterior, lo cual, como ya se expuso, no sucedió, ya que con base en el artículo 78, fracción XI; en concordancia con el artículo 202 del Estatuto anterior, el derecho del personal del Servicio de solicitar un cambio de adscripción y rotación a petición de persona interesada estaba sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos.

*Debido a lo anterior, tanto usted como la * [REDACTED] no fueron acreedores al derecho de solicitar un cambio de adscripción o rotación con el Estatuto anterior, por lo tanto, al entrar en vigor el Estatuto, no violentó, modificó, o privó de ningún derecho al cual hayan sido acreedores. Al respecto, se invoca la Tesis Jurisprudencial 2a./J. 87/2004, sustentada por Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido señala: "RETROACTIVIDAD DE LA LEY. ES DIFERENTE A SU APLICACIÓN RETROACTIVA. [...]"*

De lo antes transcrito, se desprende que la responsable sustenta su determinación en la teoría de los derechos adquiridos, con base en la cual, efectivamente, para que se considere que la aplicación de una norma es retroactiva, se requiere que con la entrada en vigor de la nueva norma, se hayan modificado o revocado derechos adquiridos con la norma anterior. Asimismo, la responsable considera que la petición

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

carece de sustento y legalidad, porque las personas peticionarias no fuimos acreedoras al derecho de solicitar un cambio de adscripción con el Estatuto anterior, y que al entrar en vigor el Estatuto vigente, este no violentó, modificó o privó de ningún derecho al cual hayan sido acreedoras. Incluso, la responsable invoca el contenido de la tesis jurisprudencial 2a./J. 87/2004 de rubro “RETROACTIVIDAD DE LA LEY, ES DIFERENTE A SU APLICACIÓN RETROACTIVA”.

Sin embargo, el análisis realizado por la responsable no es congruente con la pretensión planteada en el escrito de fecha 15 de febrero de 2022, en el cual se solicitó el estudio de las normas estatutarias a la luz de la teoría de los componentes de la norma, no bajo los parámetros de la teoría de los derechos adquiridos.

*Es decir, al acto impugnado no guarda correspondencia formal entre la solicitud planteada y la respuesta otorgada por la responsable, toda vez que en la petición referida se solicitó realizar el análisis de las disposiciones estatutarias, no en consideración a la teoría de los derechos adquiridos, sino a la luz de la teoría de los componentes de la norma sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia **P./J. 123/2001**; tal y como se desprende del contenido del escrito de petición de fecha 15 de febrero de 2022, que se cita a continuación:*

*Conforme a la **teoría de los componentes** de la norma, para determinar si una norma cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si el supuesto se realiza, la consecuencia debe producirse, generándose así, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquellos y cumplir con éstos [...]*

*De esta forma, para resolver sobre la retroactividad a irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los **componentes de la norma jurídica**. [...]*

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

*A partir de lo anterior, se impone realizar el análisis de las normas estatutarias en el contexto de la **Teoría de los componentes de la norma**, en la cual se señala que puede suceder que la realización de alguna de las consecuencias de la ley anterior, no dependa de la realización de los supuestos previstos en esa ley, sino que tal realización estaba solamente diferida en el tiempo por el establecimiento de un plazo o término específico, en cuyo caso la nueva disposición no deberá suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, por la razón sencilla de que éstas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley. [...]*

*En otros términos, al concatenar el contenido del artículo 202 del Estatuto derogado, con la **Teoría de los componentes de la norma**, se concluye que el cambio de adscripción a petición del interesado previsto en el Estatuto anterior, no dependía únicamente de los supuestos previstos en dicha norma, sino que su realización estaba diferida en el tiempo, por el establecimiento del plazo de un año en el cargo o puesto y adscripción y la experiencia en un proceso electoral federal.*

*Por lo tanto, conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia **P./J. 123/2001**, en el ciclo de transición no debieron aplicarse las disposiciones que modifican o condicionan las consecuencias no realizadas del Estatuto anterior, dado que dicha aplicación tendría efectos retroactivos a la luz de la **Teoría de los componentes de la norma**, toda vez que su realización estaba solamente diferida en el tiempo.*

*Cabe señalar que la **Teoría de los componentes de la norma** ha sido aplicada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-REC-180/2020 [...].*

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente:

Pedimos:

Tercero. Se emita resolución favorable a la luz de las consideraciones de hecho y de derecho expuestas en el presente

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

escrito, a fin de que se habilite a quienes suscribimos para realizar el cambio de adscripción solicitado (página 14).

[Énfasis añadido]

*Es así, que la causa de pedir del escrito de petición de fecha 15 de febrero de 2022, tiene su base, no en la teoría de los derechos adquiridos invocada por la responsable, sino en la teoría de los componentes de la norma a que se refiere la jurisprudencia **P./J. 123/2001** del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.*

En consecuencia, el acto reclamado transgrede el principio de congruencia, indispensable para tener por colmado el derecho de petición, al no existir correspondencia formal entre la solicitud planteada y la respuesta otorgada por la autoridad, en apego al criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis II/2016.

2. Transgresión al principio de exhaustividad.

Las autoridades electorales, cuyas resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación, están obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquellas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los actos objeto de reparo e impiden que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano, por una tardanza en su dilucidación.

De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no solo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116,

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Este criterio es sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 43/2022 que se cita a continuación:

Organización Política Partido de la Sociedad Nacionalista

vs

Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León

Jurisprudencia 43/2002

PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.-

Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas etapas y la realización de los actos de que se compone el proceso electoral. De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercera Época:

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-010/97. Organización Política Partido de la Sociedad Nacionalista. 12 de marzo de 1997. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2002. Partido de la Revolución Democrática. 13 de febrero de 2002. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-067/2002 y acumulado. Partido Revolucionario Institucional. 12 de marzo de 2002. Unanimidad de cinco votos.

Notas: El contenido del artículo 41, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en esta jurisprudencia, corresponde al artículo 41, fracción V, de la Constitución federal vigente

La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 51.

*Una vez expuesto lo anterior, del análisis del acto reclamado se desprende que la responsable no estudio completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones sometidas a su conocimiento, toda vez que no atendió el planteamiento realizado en el escrito de petición de fecha 15 de febrero de 2022, consistente en el análisis del caso concreto, a la luz de la jurisprudencia **P./J. 123/2001** del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.*

Tal omisión no asegura el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por las autoridades electorales deben generar, ya que, ante la falta de estudio de dicho planteamiento, el acto impugnado genera que el órgano superior, no esté en condiciones de resolver de una vez la totalidad de la cuestión.

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

Asimismo, la ausencia del análisis propuesto produce la privación injustificada de derechos por una tardanza en su dilucidación, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción V; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, como se expondrá en el punto subsecuente, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se reconoce la existencia, no solamente de la teoría de los derechos adquiridos, sino también, de la teoría de los componentes de la norma, para distinguir los supuestos en que la ley rige al pasado en perjuicio de las personas.

No obstante, la teoría de los componentes de la norma se propuso a la responsable en el escrito de petición para el análisis del caso concreto, sin que existiera el estudio de dicho planteamiento en el acto impugnado, el cual se limitó a pronunciarse por una sola de las soluciones plausibles, omitiendo la propuesta de análisis contenida en el escrito de petición de fecha 15 de febrero del año en curso.

*Lo anterior, hace patente la transgresión al principio de exhaustividad en los términos de la jurisprudencia 43/2002 citada con anterioridad, al soslayar las consideraciones de derecho referentes a la aplicación de la Teoría de los componentes de la norma sostenida en la jurisprudencia **P./J. 123/2021**, expuesta en el escrito de petición de fecha 15 de febrero del año en curso, transgrediendo de esta manera el debido proceso, la seguridad jurídica y la certeza del peticionario.*

[...] sic

Los agravios tercero y cuarto se analizan de manera conjunta en razón de que estos se encuentran relacionados entre sí y los cuales **SE DESESTIMAN** de acuerdo con lo siguiente:

En esencia el recurrente controvierte que la DESPEN no realizó el estudio de las normas estatutarias a la luz de la teoría de los componentes de la norma, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 123/2001, lo cual fue solicitado por los peticionarios, entre ellos el recurrente, mediante el escrito de solicitud de cambio de adscripción a petición de persona interesada del 15 de febrero de 2022.

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

Al respecto, de la revisión efectuada al escrito de solicitud de cambio de adscripción a petición de persona interesada del 15 de febrero de 2022, se observa que, en efecto, los peticionarios solicitaron a la DESPEN que se realizara el estudio de las normas estatutarias a la luz de la teoría de los componentes de la norma, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 123/2001.

Del análisis efectuado al oficio INE/DESPEN/619/2022, mediante el cual se determinó improcedente la solicitud de cambio de adscripción a petición de persona interesada por la vía de la permuta de los peticionarios, se observa que la DESPEN se limitó a realizar el análisis de las normas estatutarias a la luz de la teoría de los derechos adquiridos, sin emitir pronunciamiento alguno respecto a la aplicación o no, al caso concreto, de la teoría de los componentes de la norma.

No obstante, la jurisprudencia P./J. 123/ 2001 en la que se contempla la teoría de los componentes de la norma, no resulta aplicable al caso concreto, pues como se analizó previamente, lo que el recurrente denomina *las consecuencias no realizadas* del derecho de solicitar un cambio de adscripción a petición de persona interesada, de conformidad con el artículo 202 del Estatuto 2016, se trataba en todo caso de una simple expectativa de derecho, dado que el momento para hacer valer dicha facultad no se generó durante la vigencia de dicho ordenamiento, pues el periodo que determinó la convocatoria para ejercerlo transcurrió durante la vigencia del Estatuto 2020.

En otras palabras, la solicitud de cambio de adscripción a petición de persona interesada formulada por los peticionarios, se basó en la aplicación retroactiva del Estatuto 2016 que prevé el derecho del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional de solicitar un cambio de adscripción o rotación; no obstante, como se indicó anteriormente, para la aplicación retroactiva de la norma es necesario que con la entrada en vigor del Estatuto 2020, se hubieran modificado o revocado derechos que el personal del Servicio hubiera adquirido con el Estatuto 2016, lo cual, en el caso que nos ocupa no aconteció, ya que con base en los artículo 78, fracción XI; en concordancia con el artículo 202 del Estatuto 2016, el derecho del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional de solicitar un cambio de adscripción o rotación a petición de persona interesada estaba sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos, entre ellos, presentarse en los plazos o periodos que para tal efecto estableciera la DESPEN.

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

Por tanto, debe desestimarse el agravio del recurrente, toda vez que con independencia de que el análisis de la solicitud de cambio de adscripción se realizara conforme a la teoría de los derechos adquiridos, lo cierto es que aun en el supuesto de analizarse bajo la óptica solicitada por el inconforme no resulta procedente el movimiento planteado, ya que como se señaló previamente, de acuerdo con la teoría de los componentes, toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, en el que si el supuesto se realiza, la consecuencia debe producirse, generándose así los derechos y obligaciones correspondientes, sin embargo, en el caso concreto el recurrente no se colocó en el supuesto en tanto que no se emitió una convocatoria que estableciera un periodo para ejercer su derecho de solicitar un cambio de adscripción a petición de persona interesada y, por tanto, no se produjo la consecuencia, esto es, el análisis del cumplimiento de requisitos para determinar la procedencia del movimiento.

4) Quinto agravio en análisis:

[...]

5. *Indebida fundamentación y motivación.*

*De acuerdo con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo acto de autoridad que cause molestias a los derechos previstos en el propio precepto debe estar fundado y motivado. En la mayoría de los casos se considera que lo primero se traduce, en que ha de expresarse el precepto legal aplicable al caso y, lo segundo, en que deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; es necesario además, que exista **adecuación** entre los motivos aducidos y las normas aplicables, de manera que quede evidenciado que las circunstancias invocadas como motivo para la emisión del acto encuadran en la norma invocada como sustento del modo de proceder de la autoridad.*

El criterio antes señalado es sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia que lleva el siguiente rubro y contenido:

Partido Revolucionario Institucional
vs
Consejo General del Instituto Federal Electoral

Jurisprudencia 1/2000

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, QUE SE EMITEN EN EJERCICIO DE LA FUNCIÓN REGLAMENTARIA.-

La fundamentación y la motivación de los acuerdos expedidos por el Instituto Federal Electoral, en ejercicio de su facultad reglamentaria, es entendible que no se exprese en términos similares que las de otros actos de autoridad. De ahí que para que un reglamento se considere fundado basta que la facultad reglamentaria de la autoridad que lo expide se encuentre prevista en la ley. Por otra parte, la motivación se cumple, cuando el reglamento emitido sobre la base de esa facultad reglamentaria, se refiere a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas, sin que esto signifique que todas y cada una de las disposiciones que integran el reglamento deban ser necesariamente materia de una motivación específica. Esto es así, porque **de acuerdo con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo acto de autoridad que cause molestias a los derechos previstos en el propio precepto debe estar fundado y motivado. En la mayoría de los casos se considera que lo primero se traduce, en que ha de expresarse el precepto legal aplicable al caso y, lo segundo, en que deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; es necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, de manera que quede evidenciado que las circunstancias invocadas como motivo para la emisión del acto encuadran en la norma invocada como sustento del modo de proceder de la autoridad.** El surtimiento de estos requisitos está referido a la fundamentación y motivación de aquellos actos de autoridad concretos, dirigidos en forma específica a causar, por lo menos, molestia a sujetos determinados en los derechos a que se refiere la propia norma constitucional. Es explicable que en esta clase de actos, la garantía de fundamentación y motivación se respete de la manera descrita, puesto que la importancia de los derechos a que se refiere el párrafo primero del artículo 16 constitucional provoca que la simple molestia que pueda producir una autoridad a los titulares de aquéllos, debe estar apoyada clara y fehacientemente en la ley, situación de la cual

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

debe tener pleno conocimiento el sujeto afectado, incluso para que, si a su interés conviene, esté en condiciones de realizar la impugnación más adecuada para librarse de ese acto de molestia. En cambio, como los reglamentos gozan de los atributos de impersonalidad, generalidad y abstracción, es patente que su confrontación con el párrafo primero del artículo 16 constitucional para determinar si se ha observado la garantía de fundamentación y motivación debe hacerse sobre la base de otro punto de vista, como es el señalado al principio.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-028/99. Partido Revolucionario Institucional. 6 de diciembre de 1999. Unanimidad de votos.

Recurso de apelación. SUP-RAP-029/99. Partido Revolucionario Institucional. 6 de diciembre de 1999. Unanimidad de votos.

Recurso de apelación. SUP-RAP-042/99. Coalición Alianza por México, integrada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo, Convergencia por la Democracia, de la Sociedad Nacionalista y Alianza Social. 2 de marzo del año 2000. Unanimidad de votos.

La Sala Superior en sesión celebrada el dos de marzo del año dos mil, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 16 y 17.

En el caso concreto, la responsable aduce que no es aplicable la disposición referente a las situaciones no previstas, al manifestar lo siguiente:

Por lo expuesto y fundado, la DESPEN considera que no es aplicable la disposición referente a las situaciones no previstas en la Convocatoria para Cambios de Adscripción o Rotación a petición de persona interesada del sistema del Instituto Nacional Electoral, toda vez que la normativa aplicable establece con certeza y

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

legalidad las condiciones, los términos, y los requisitos para que el personal del Servicio Profesional ejerza su derecho de solicitar su cambio de adscripción o rotación a petición de persona interesada previsto en el artículo 67, fracción XI del Estatuto. En este sentido, la solicitud de cambio de adscripción por la vía de la permuta entre la [REDACTED] y usted resulta improcedente.

Sin embargo, la responsable no explica cómo es que la Convocatoria prevé el ciclo de transición a que se refiere el artículo Séptimo transitorio del Estatuto, pues si bien es cierto invoca el artículo Sexto de los Lineamientos, también lo es que esta última disposición normativa se limita a señalar los casos de la titularidad del cargo o puesto y los avances obtenidos en la profesionalización, sin que sea jurídicamente plausible identificar el todo (artículo Séptimo transitorio del Estatuto), con sus partes (artículo Sexto transitorio de los Lineamientos).

*Asimismo, la responsable no explica cómo es que la Convocatoria cumple con la jurisprudencia **P./J. 123/2001**, para que la aplicación de sus disposiciones no sea retroactiva, ya que, aun cuando es cierto que analiza el tema de la retroactividad, lo hace de manera parcial, solamente desde la perspectiva de los derechos adquiridos, omitiendo realizar el estudio propuesto, referente a la aplicación de la teoría de los componentes de la norma sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.*

De tal modo, no existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, de manera que queda evidenciado que las circunstancias invocadas como motivo para la emisión del acto encuadran en la norma invocada como sustento del modo de proceder de la autoridad.

[...] sic

De igual manera **SE DESESTIMA** el quinto agravio de acuerdo con lo siguiente:

En el presente agravio en análisis se observa que el recurrente manifiesta dos motivos de disenso, los cuales se analizan de manera separada a continuación.

1. Por una parte, el recurrente se agravia de que en el oficio INE/DESPEN/619/2020 del 22 de marzo de 2022, mediante el cual se determinó improcedente su solicitud

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

de cambio de adscripción a petición de persona interesada por la vía de la permuta, la Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional no explica cómo es que la Convocatoria prevé el ciclo de transición a que se refiere el artículo Séptimo Transitorio del Estatuto 2020.

Al respecto, si bien es cierto que del análisis del oficio INE/DESPEN/619/2022 del 22 de marzo de 2022, no se observa una explicación respecto a cómo es que la Convocatoria prevé el ciclo de transición a que se refiere el artículo Séptimo Transitorio del Estatuto 2020, también lo es que, en dicho oficio se observa la atención al punto antes mencionado, pues en dicho oficio se señala lo siguiente:

13. *Ahora bien, no pasa inadvertido que en su solicitud señala la existencia de un régimen transitorio deducido de lo dispuesto por el artículo Séptimo Transitorio del Estatuto, mismo que no se encuentra considerado en la convocatoria correspondiente y que por tal motivo, a su juicio, deben aplicarse en forma retroactiva las disposiciones del Estatuto anterior.*

Al respecto, debe decirse que tal aseveración se encuentra descontextualizada, derivado de que, de la lectura integral del propio artículo Transitorio y su correlativo Sexto de los Lineamientos, se obtiene que el primer ciclo íntegro será de septiembre de 2022 a agosto de 2025 (en función del proceso electoral federal) y que para efectos de los cambios de adscripción y rotación a petición de persona interesada, se tomará en consideración la titularidad del cargo o puesto que ocupe la persona solicitante, así como los avances obtenidos en su profesionalización, “hasta en tanto se cuente con información de un ciclo trianual completo”.

En este sentido, resulta evidente que para las solicitudes de cambios de adscripción y rotación debe tomarse en consideración el ciclo trianual comprendido de septiembre de 2022 a agosto de 2025 para efectos del cumplimiento del requisito previsto en la fracción V del artículo 237 del Estatuto.

En efecto, el artículo Séptimo Transitorio del Estatuto 2020 señala que en virtud de que los ciclos trianuales se organizan en función del proceso electoral federal, el primer ciclo íntegro será de septiembre de 2022 a agosto de 2025, y que para efectos de la carrera profesional electoral en el Instituto se contemplará como

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

primer ciclo de transición el que se extiende de septiembre de 2020 a agosto de 2022.

En ese sentido, como bien lo determinó la DESPEN, de la lectura de dichos artículos Transitorios se desprende que para las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona interesada, se tomará en consideración el ciclo trianual comprendido de septiembre de 2022 a agosto de 2025 para efectos del cumplimiento del requisito previsto en la fracción V del artículo 237 del Estatuto 2020.

Aunado a lo anterior, resulta importante señalar que el escrito de petición de fecha 15 de febrero de 2022, mediante el cual, el recurrente en conjunto con otra funcionaria solicitó el cambio de adscripción a petición de persona interesada por la vía de la permuta, se encuentra fundamentado en el apartado F. OTRAS DISPOSICIONES, fracción II de la Convocatoria; no obstante, dicha disposición se refiere a las situaciones no previstas en la Convocatoria, en consecuencia, en el caso que nos ocupa, la referida disposición no resulta aplicable al caso concreto, pues en la normatividad aplicable se estableció con certeza y legalidad las condiciones, los términos, las causales de improcedencia de las solicitudes y los requisitos que se tendrían que cumplir para que el personal del Servicio Profesional Electoral Nacional ejerciera su derecho de solicitar su cambio de adscripción o rotación a petición de persona interesada, el cual se encuentra previsto en el artículo 67, fracción XI del Estatuto 2020.

Asimismo, debe señalarse que el recurrente se sometió a las reglas establecidas en la Convocatoria, y toda vez que no controvertió su contenido en el momento procesal oportuno, el presente medio de impugnación no es la vía para hacer valer su inconformidad con la misma y precisamente en dicha convocatoria se prevé que debe contar con la titularidad en el nivel del cargo o puesto que ocupe, por lo que su pretensión de que se realice una interpretación a modo para que se le exima de cumplir dicho requisito no resulta procedente. Lo anterior porque de acoger su pretensión se vulneraría el principio de certeza y seguridad jurídicas, en tanto que las reglas para quienes participaron en la convocatoria deben de aplicarse por igual, para brindar las mismas oportunidades, bajo las mismas condiciones.

En ese sentido, la DESPEN no se encontraba vinculada a explicar, como lo pretende el recurrente, cómo la convocatoria prevé el ciclo trianual, sino a analizar el cumplimiento de requisitos por parte de los solicitantes.

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

Como previamente se señaló, su derecho a solicitar un cambio de adscripción sigue las reglas de la norma que aplique al momento que ejerce dicha prerrogativa, por lo que resulta injustificada la exigencia de que se le aplique una norma anterior, para que se le exima de cumplir un requisito.

2. Por otra parte, el recurrente también se duele de que en el oficio INE/DESPEN/619/2020 del 22 de marzo de 2022, mediante el cual se determinó improcedente su solicitud de cambio de adscripción a petición de persona interesada por la vía de la permuta, la Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional no explica cómo es que la Convocatoria cumple con la jurisprudencia P./J. 123/2001, para que la aplicación de sus disposiciones no sea retroactiva.

Al respecto, del análisis al contenido del oficio INE/DESPEN/619/2022 del 22 de marzo de 2022, no se observa una explicación respecto a cómo es que la Convocatoria cumple con la jurisprudencia P./J. 123/2001, para que la aplicación de sus disposiciones no sea retroactiva, pues incluso, como se señaló en el análisis de uno de los agravios anteriores, en el caso que nos ocupa la DESPEN se limitó a realizar el análisis de las normas estatutarias a la luz de la teoría de los derechos adquiridos, sin emitir pronunciamiento alguno respecto a la aplicación o no, al caso concreto, de la teoría de los componentes de la norma, lo cual fue solicitado por el recurrente.

Sin embargo, a juicio de esta autoridad la jurisprudencia P./J. 123/ 2001 en la que se contempla la teoría de los componentes de la norma, no resulta aplicable al caso concreto, pues como previamente se señaló no se emitió una convocatoria para solicitar el movimiento y en consecuencia que el recurrente pudiera hacerlo efectivo, ya que fue hasta que entró en vigor el Estatuto 2020 que pudo ejercer dicha prerrogativa, por lo que se reitera que es dicha disposición la que regula el derecho y sus consecuencias, por lo que debe desestimarse el agravio.

5) Sexto agravio en análisis:

6. *Vulneración al derecho de protección de la familia.*

[...]

La Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha establecido que los artículos 17 de la Convención Americana sobre

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

Derechos Humanos y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen la protección de la familia como derecho humano.

*Ahora bien, de la interpretación que de este derecho han realizado diversos organismos internacionales en materia de derechos humanos, deriva su contenido y alcance, al señalarse que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y **debe ser protegida por la sociedad y el Estado**; y que el derecho de protección a la familia **implica favorecer ampliamente el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar**. Dicho criterio puede ser consultado en la siguiente Tesis:*

Época: Décima Época

Registro: 2002008

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la federación y su Gaceta

Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2

Materia(s): Constitucional, Civil

Tesis: 1a. CCXXX/2012 (10a.)

Página: 1210

PROTECCIÓN DE LA FAMILIA COMO DERECHO HUMANO EN EL DERECHO INTERNACIONAL. SU CONTENIDO Y ALCANCE.

Los artículos 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen la protección de la familia como derecho humano. Ahora bien, de la interpretación que de este derecho han realizado diversos organismos internacionales en materia de derechos humanos, deriva su contenido y alcance: a) la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado; b) la familia y el matrimonio no son conceptos equivalentes, lejos de ello, el matrimonio únicamente es una de las formas que existen para formar una familia; c) el derecho de protección a la familia implica favorecer ampliamente el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar, mas no del matrimonio; d) por el simple nacimiento de un niño, existe entre

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

éste y sus padres un vínculo que implica vida familiar, donde el goce mutuo de la compañía constituye un elemento fundamental de aquélla, aun cuando la relación de los padres esté rota, por lo que medidas nacionales que limiten tal goce sí conllevan una interferencia al derecho a la protección de la familia; así, una de las interferencias más graves es la que tiene como resultado la división de una familia; e) la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen como legítima la disolución del vínculo matrimonial, siempre y cuando se asegure la igualdad de derechos, la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges y la protección necesaria de los hijos sobre la base única del interés y conveniencia de ellos; y, f) ningún instrumento internacional en materia de derechos humanos ni sus interpretaciones, se pronuncian sobre procedimientos válidos o inválidos para disolver el vínculo matrimonial, lejos de ello, dejan en libertad a los Estados para que en sus legislaciones establezcan los que consideren más adecuados para regular las realidades propias de su jurisdicción, siempre y cuando ninguno de éstos se traduzca en un trato discriminatorio en los motivos o en los procedimientos.

Amparo directo en revisión 1905/2012. 22 de agosto de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia.

Así, el acto impugnado transgrede el derecho de protección de la familia, toda vez que impide que el suscrito pueda reintegrarme con mi familia, la cual se encuentra conformada, por mi esposa, mi hija y mis dos hijos, los últimos tres menores de edad, situación que se hizo del conocimiento de la responsable en el escrito de petición de fecha 15 de febrero de 2022.

En este aspecto, las autoridades del Estado deben velar por el mantenimiento de las relaciones familiares indispensables para el desarrollo y fortaleza de la misma, removiendo aquellas medidas que puedan transgredir su protección, como es el caso del acto que ahora se impugna, toda vez que este implica un impedimento para que el suscrito

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

pueda realizar un cambio de adscripción para la preservación de mis relaciones familiares.

En otros términos, al impedir que el suscrito realice el cambio de adscripción, se lesiona mi núcleo familiar, el cual debe ser protegido en términos de los artículos 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

*Al respecto, es de señalar que, si bien es cierto, para ingresar al servicio se concursa por la plaza de un cargo o puesto determinado y no por una adscripción específica, también lo es, que para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia SUP-JDC-2490/2020 “la movilidad tanto por necesidad como por desarrollo de la Carrera está directamente ligada a aspectos técnicos y operativos de la estructura del Servicio Profesional, **a diferencia de la movilidad que ocurre a petición de parte, en la que subyacen intereses de índole personal**, [como es el caso de la familia], **más que estructurales**”.*

Todo lo anterior viene a colación, en virtud de que en el escrito de petición de fecha 15 de febrero de 2022, se hizo del conocimiento de la responsable que el motivo que sustenta la solicitud del cambio de adscripción, es acercarme a mi familia conformada por mi esposa, mi hija y dos hijos menores de edad, ahora de 13, 11 y 5 años de edad, quienes viven en el estado de Jalisco.

Respecto al sexto agravio en análisis, esta Junta General Ejecutiva lo determina **INFUNDADO**, lo anterior de acuerdo con lo siguiente:

En el caso que nos ocupa, la improcedencia para el otorgamiento de cambio de adscripción a petición de persona interesada determinada por la Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral mediante el oficio INE/DESPEN/619/2022 del 22 de marzo de 2022, tiene sustento en el incumplimiento, por parte de los solicitantes, respecto de los requisitos establecidos para ello, por lo que de ninguna manera se puede afirmar que dicha negativa tuvo la finalidad de causar lesión al núcleo familiar del recurrente; dicho de otro modo, en el caso concreto, la DESPEN determinó improcedente la solicitud de cambio de adscripción a petición de persona

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

interesada derivado de que los solicitantes, entre ellos el recurrente, no cumplieron con los requisitos que para tal efecto se establecen en la normatividad aplicable, lo cual ya ha sido motivo de análisis en la presente resolución, y no como tal, vulnerar el derecho de protección de la familia del recurrente.

En ese sentido, si bien es cierto que el cambio de adscripción a petición de persona interesada solicitado por el recurrente, le podría permitir estar más cerca de su núcleo familiar, lo cual en sí conlleva un interés personal, también lo es que para que proceda el otorgamiento de dicho cambio de adscripción es indispensable que los solicitantes cumplan con todos y cada uno de los requisitos que para ello se contemplan en la normatividad aplicable, lo que como ya se ha señalado, en el caso concreto no aconteció.

Aunado a lo anterior, como bien lo señala el propio recurrente en su escrito de recurso de inconformidad, para ingresar al Servicio Profesional Electoral Nacional, las y los aspirantes para ocupar cargos o puestos del Servicio concursan por un cargo o puesto determinado y no por una adscripción específica, como lo determina el artículo 202 del Estatuto 2020; lo que implica que al ingresar al Servicio Profesional Electoral Nacional, los miembros del Servicio están sujetos a ocupar un cargo específico ya sea en la localidad donde tienen su domicilio familiar o en alguna localidad lejana a dicho domicilio familiar, lo que en modo alguno tiene la finalidad de vulnerar el derecho de protección de la familia de los miembros del Servicio, al ser un acto consentido por el propio recurrente desde el momento en que aceptó el cargo en dicha adscripción, (lo que se acredita con el oficio INE/SE-0211/2022 del 25 de febrero de 2020 suscrito por el Secretario Ejecutivo, mediante el cual se otorgó área de adscripción al recurrente, documento que fue ofrecido por el recurrente como prueba en el presente medio de impugnación).

No debe dejarse hacer notar que en la permuta los miembros del Servicio deben cumplir con los requisitos, pues el hecho de solicitarlo no garantiza que en automático se otorgue el cambio, toda vez que conforme al artículo 236 del Estatuto, el cambio de adscripción a petición de persona interesada es la movilidad con base en el mérito, en ese sentido, la titularidad y el avance en la profesionalización juegan un papel fundamental porque a partir de ello puede medirse de manera objetiva el merecimiento de entre los solicitantes para ser objeto del movimiento.

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

Finalmente, si bien resultan importantes los motivos personales, lo cierto es que no pueden estar sobre el interés social, por lo que para realizar los cambios atendiendo a motivos personales deben cubrirse los requisitos que establece la norma a efecto de cubrir las necesidades institucionales y que el procedimiento que regula dichos movimientos garantice el cabal cumplimiento de las funciones públicas.

SEXTO. Determinación. En razón de lo anterior, y contrario a lo que sostiene el recurrente, esta Junta General Ejecutiva estima que la improcedencia para el otorgamiento de cambio de adscripción a petición de persona interesada determinada por la Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral mediante el oficio INE/DESPEN/619/2022 del 22 de marzo de 2022, se encuentra apegada a derecho, por lo que lo procedente es **CONFIRMAR** la determinación antes mencionada.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 358, 360 fracción I y 368 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, reformado mediante Acuerdo INE/CG162/2020 y adicionado mediante el Acuerdo INE/CG23/2022, esta Junta General Ejecutiva:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se **CONFIRMA** la determinación de la Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral emitida mediante el oficio INE/DESPEN/619/2022 del 22 de marzo de 2022.

SEGUNDO. Notifíquese al recurrente, como corresponda por conducto de la Dirección Jurídica.

TERCERO. Para los efectos legales a que haya lugar, hágase del conocimiento la presente resolución a la Dirección Ejecutiva de Administración y a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/14/2022

CUARTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva celebrada el 15 de diciembre de 2022, por votación unánime de las y los Directores Ejecutivos del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de la encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, Licenciada Claudia Urbina Esparza; de Organización Electoral, Maestro Sergio Bernal Rojas; del Servicio Profesional Electoral Nacional, Licenciada Ma del Refugio García López; de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto y de Administración, Licenciada Ana Laura Martínez de Lara; de la Directora y los Directores de las Unidades Técnicas de Fiscalización, Maestra Jacqueline Vargas Arellanes; de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL Y PRESIDENTE
DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL**

**EL SECRETARIO EJECUTIVO Y
SECRETARIO DE LA JUNTA
GENERAL EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**

*** Eliminado conforme a los artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 15, numeral 2, fracción I del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.**